REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

Valledupar, veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023).

REF.: PROCESO DE INSOLVENCIA
RAD.: 20001-40-03-005-2022-00529-00
DEUDOR: HUBER PADILLA ARRIETA
DECISIÓN: RESUELVE OBJECIONES

ASUNTO:

Resuelve el Despacho las objeciones remitidas por el Operador de Insolvencia adscrito a al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Valledupar, doctor ELBERT ARAÚJO DAZA, presentadas por los apoderados judiciales de BANCOOMEVA S.A. y BANCO PICHINCHA S.A., respectivamente, dentro del Trámite de Negociación de Deudas de Persona Natural No Comerciante, promovido por el señor HUBER PADILLA ARRIETA.

ANTECEDENTES

Como quiera que es la segunda ocasión que el expediente viene para resolver objeciones, las primeras se resolvieron el 11 de agosto de 2021, se hará referencia solo a lo acontecido con posterioridad a esa fecha.

Recibido el expediente en el centro de conciliación, se celebró audiencia el 31 de agosto de 2022, oportunidad en la cual se puso de presente la decisión adoptada por este juzgado, respecto de las objeciones presentadas por el Banco Coomeva, y se suspende por solicitud del deudor. Nuevamente se instaló el 10 de septiembre de 2022, y, otra vez, se hizo relación a la decisión del estrado, al tiempo que se advirtió de la existencia de una discrepancia por parte de Bancoomeva S.A.¹ Igualmente, informa que el crédito a favor del Banco Pichincha S.A. no ha sido graduado ni calificado, dado que las cifras presentadas por las partes difieren ostensiblemente, razón por la cual se formula discrepancia que, al no poder ser conciliada, es propuesta como objeción. Suspende para que, dentro del término legal, la objetante la presente por escrito, acompañando las pruebas que pretenda hacer valer y, con posterioridad, correr traslado del escrito para que se pronuncien sobre la objeción y aporten la evidencia que consideren.

El 21 de septiembre de 2022 es radicado el escrito de objeciones por parte de Bancoomeva; en la misma data, hace lo propio el Banco Pichincha S.A. Surtido el correspondiente traslado, el 28 de septiembre de 2022, el insolvente, Huber Padilla Arrieta, se pronuncia frente a las objeciones de las entidades bancarias. El 29 de septiembre próximo siguiente, el conciliador remite las diligencias a este juzgado.

DE LAS OBJECIONES

El Banco Coomeva S.A., hace la siguiente exposición, en resumen²:

El deudor tiene tres (3) obligaciones vigentes con la entidad, las cuales corresponden a un Crédito de Cupo activo, obligación No. 240116122607, el cual presenta, a 20 de septiembre del 2022, un saldo de capital de \$41.929.962; de intereses de plazo, \$7.141.902, y de intereses por mora \$73.557,41, para un total de saldo \$122.629.275.

Crédito Cupo Multiservicio, obligación No. 240122510710, saldo de capital, a 20 de septiembre del 2022, \$2.599.274; intereses corrientes \$251.496 e intereses por mora \$4.569.010, para un total de \$7.379.780.

Credito TAC VISA ORO, obligación No. 34831, a 20 de septiembre de 2022, saldo a Capital \$2.205.000; intereses de plazo \$ 4.213.013, e intereses por mora

¹ Folio 283, Cuad. 01Demanda, Exp. digital

² Folio 285, Cuad. 01Demanda, Exp. digital

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

\$26.217, para un total de \$6.444.230.

La sumatoria de estas obligaciones insolutas asciende a la suma de CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO pesos (\$136.453.285), y no de \$34.000.000.00, como sostiene el deudor.

Como prueba de lo afirmado aporta certificación firmada por el director de cartera regional caribe de Bancoomeva.

Por su parte, el Banco Pichincha S.A., sustenta en los siguientes términos:

La entidad bancaria desembolsó al deudor, el 17 de octubre de 2013, la suma de \$28.450.000.00, por concepto de un crédito, el cual incluía un plazo de gracia de 24 meses, lapso en el que solo debía cancelar los cargos fijos del mutuo, condiciones que fueron incumplidas por el insolvente, razón que llevó a que estos valores fueran capitalizados, de acuerdo con lo convenido en la solicitud de crédito, pagaré y carta de instrucciones. El banco declaró vencido el plazo y procedió a diligenciar el pagaré, con los saldos adeudados hasta entonces, que corresponde, por concepto de capital, a \$35.393.883.81, y no \$28.500.000.00, como afirma el deudor, de acuerdo con la documentación aportada como prueba. Solicita declarar probada la objeción.

Pronunciamiento del insolvente

Sobre la objeción presentada por Bancoomeva, afirma que su cupo activo era de \$50.000.000.00, y efectuó pagos por \$11.600.000.00, el 17/04/2015, y de \$3.994.000.00, el día 05/08/2015, valores que no se ven reflejados en los pagos. Anuncia el acompañamiento de copias de las consignaciones. La entidad adolece de claridad pues en la audiencia del 14 de septiembre de 2022, indicó que lo adeudado era \$49.219.149, pero, por escrito afirma que la deuda es de \$46.694.236.00, lo que genera confusión sobre el saldo.

La certificación de la deuda tiene como fecha de corte el 20 de septiembre de 2022, pero se debe tener en cuenta que este se debió hacer en la fecha de admisión de la solicitud, esto es, el 12 de febrero de 2020. La prueba es inconducente y por esa causa se debe rechazar la objeción por carencia de soporte suasorio.

El apoderado planteó en la anterior oportunidad sobre la existencia otros créditos, pero guardó silencio frente a la discrepancia que existe desde el 09 de febrero de 2021, entre el valor de capital indicado por él y el que reclama el acreedor; formula objeción el 24 de febrero de 2021, y la “presenta” el 03 de marzo de 2021, sin pronunciamiento sobre la discrepancia, lo que concluye que no presentó objeción frente a la cuantía, dentro del término al que alude el art. 552.

En lo que respecta al Banco Pichincha, dice no estar de acuerdo porque los hechos “hablan por sí solos”. La apoderada manifestó un valor adeudado superior al 50% del valor del vehículo, siendo que este porcentaje corresponde a la suma de \$28.450.000.00, para lo cual aporta copia de la factura expedida por la empresa Mayorautos S.A.S.

Requiere la negativa de las objeciones.

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES:

Atendiendo que, como ya se dijo, esta es la segunda vez que el expediente viene para resolver objeciones, el estrado no ahondará sobre las generalidades y principios del proceso de insolvencia de persona natural no comerciante, ni del papel del conciliador o del juez, únicamente se va a limitar a recordar sobre los aspectos susceptibles de objeciones y el trasegar que se debe surtir para desembocar en ellas. Finalmente, se referirá al caso concreto.

*SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS*³

Son dos situaciones distintas, la discrepancia y la objeción. La discrepancia es la falta de acuerdo entre dos o más personas, mientras que la objeción es el recurso por medio del cual una parte acude al juez para que resuelva la diferencia planteada.

En caso que se mantengan las discrepancias, el conciliador procurará fórmulas de arreglo acordes con la finalidad y los principios del régimen de insolvencia, para lo cual podrá suspender la audiencia hasta por un tiempo máximo de diez (10) días hábiles.

De manera genérica, se puede afirmar que la objeción es el recurso por medio del cual una parte acude al juez para que resuelva la diferencia planteada. Articulando los conceptos, una objeción es una discrepancia que no pudo ser conciliada en la audiencia de negociación de deudas, la cual, de acuerdo con el mandato del artículo 534 del Código General del Proceso, debe ser dirimida por el juez competente, como lo dispone el artículo 552 *ibidem*.

El juez civil municipal que conoce de una objeción, primero debe verificar que las partes intentaron conciliar el asunto y, mucho más, que el conciliador hizo todo lo posible para que llegaran a un acuerdo, por ejemplo, que pidió información adicional, que suspendió para que las personas en discrepancia realizaran consultas y verificaran información, es decir, que se utilizaron todas las herramientas necesarias para evitar la objeción. Igualmente, el juez civil municipal solo podrá resolver las objeciones que fueron planteadas en el proceso de negociación, no puede ir más allá de lo discutido y no resuelto, que necesariamente deben hacer referencia a la *existencia, naturaleza y cuantía*, de las obligaciones, a partir de la información declarada por el deudor insolvente.

La “*existencia*” de la obligación hace referencia al cumplimiento de los requisitos legales que esta debe contener para que nazca al mundo jurídico; si no lo hace, simplemente no existe.

La “*naturaleza*” se refiere a la clasificación legal de la acreencia, según su origen. Se presenta cuando un acreedor exterioriza su desacuerdo con la prelación que se le ha dado a su crédito o del otro acreedor, con fundamento en lo dispuesto en el Código Civil.

Y, la “*cuantía*”, tiene que ver con la disconformidad sobre el capital de la acreencia propia o de otra reclamada, cuando se considera que difiere con el valor que realmente corresponde.

CASO CONCRETO

Sin mayores elucubraciones se determina que las objeciones tienen que ver con la cuantía de las mismas, ante la desavenencia sobre el total de los pasivos entre los acreedores objetantes y el promotor de la insolvencia. Veamos:

El Banco Coomeva aporta certificación de cada una de las tres obligaciones que se encuentran en mora, a cargo del insolvente, los cuales tienen como fecha común de

---

³ *Ibidem*

JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

---

desembolso el 8 de febrero de 2010. El documento no se consigna ningún tipo de abono y lo hace con corte a 20 de septiembre de 2022. Según da cuenta el pantallazo del envío de la objeción, se adjuntaron al escrito, como soporte, la carta de aprobación del crédito, la hoja de aprobación “VH PN” y el “movimiento histórico”; ninguno de ellos consta en el expediente.

Riposta el deudor que efectuó pagos por \$11.600.000.00, el 17/04/2015, y por \$3.994.000.00, el día 05/08/2015, los cuales no aparecen reflejados en el extracto presentado por el banco, y aporta copias de las presuntas consignaciones; igualmente, se queja de la falta de “claridad”, pues la entidad ha variado las cifras en las audiencias, siendo la última de menor valor y, finaliza, la certificación del saldo de la deuda debió hacerse hasta la fecha de admisión de la solicitud.

Es necesario advertir que el conciliador omitió la impresión de la totalidad de los archivos adjuntos al escrito de objeciones, se itera, la carta de aprobación del crédito, la hoja de aprobación “VH PN” y el “movimiento histórico”, documentos a partir de los cuales se podría extraer información que pudiera dar luces sobre aspectos desconocidos, como el valor total desembolsado, la relación de pagos y las fechas en se hicieron, si los hubo.

De todas maneras, de acuerdo con la normatividad que determina el transcurrir procesal del procedimiento de insolvencia, es pertinente recordar que los soportes que buscan demostrar sobre la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones, deben ser presentados en las audiencias de negociación de pasivos, lo cual permite a los contradictores controvertir el contenido de los documentos, escuchar las explicaciones sobre los puntos en desacuerdo, o requerir más información que coadyuve en la demostración de los hechos en desavenencia, entre otros aspectos. Bastante se ha dicho sobre la infracción que se materializa cuando el deudor no acredita sus dichos con documentos idóneos en las audiencias, pues esta conducta desconoce el derecho de contradicción que la ley les reserva a sus acreedores; también se ha afirmado que no es procedente que se reserve la exhibición de la evidencia para ser presentada ante el juez que conoce de las objeciones, pues este nada tiene que decir sobre el particular, salvo que las objeciones se originen respecto de los soportes llevados a las audiencias y hayan sido sometidos a consideración de los participantes.

Lo anterior para reafirmar que si la presentación documental de la información que busque acreditar los aspectos susceptibles de debate, no se produce al interior de las audiencias de negociación de deudas, para permitir el escrutinio de los interesados, la sanción es la exclusión de lo que no se acredite. En el caso estudiado, como quiera que las copias documentales presentadas por el deudor, con las cuales pretende probar unos presuntos pagos, no fueron presentadas en la oportunidad procesal debida, para recibir respuesta del objetante, el juez no está habilitado para pronunciarse sobre ellas, y la consecuencia es la exclusión del trámite.

Sobre las restantes alegaciones que buscan desacreditar los fundamentos fácticos de las objeciones, solo baste decir que estas carecen de contenido sustancial que hagan peligrar la actuación, motivo por el cual no recibirán ningún análisis.

Sin embargo, a título de mera ilustración académica, es evidente que las copias de las facturas que pretenden demostrar de los presuntos pagos realizados no superan los requisitos de conducencia y utilidad que deben contener, teniendo en cuenta que las mismas omiten informar en qué banco o sucursal de la acreedora se realizaron los pagos, ni explican el por qué, si se cancelaron desde el año 2017, nunca se había preocupado por verificar la contabilización de esos pagos, para así exigir una explicación a la entidad.

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

Y sobre las tachas a las argumentaciones del banco Pichincha, digamos inicialmente que la evidencia presentada por la entidad da cuenta que a este se le aprobó un crédito, modalidad 50/50, para la compra de un vehículo, en la suma de \$28.450.000.00, valor que equivalía al 50% del costo del rodante. La aludida suma le fue desembolsada el 2013/10/17; el último pago registrado fue el 2015/09/22, y hasta entonces había cancelado un total de \$6.943.883.00, quedando pendiente la suma de \$35.393.883.81.

El insolvente expone que “*los hechos hablan por sí solos*” y el banco está cobrando un valor superior al 50% del vehículo, que fue de \$28.450.000.00, y adjunta copia de la factura de venta expedida por “Mayorautos S.A.S.”, el 07/10/2013, que da cuenta que el costo del rodante fue de \$56.900.000.00, y que la mitad es la suma prestada.

Como bien lo expresa el deudor, “los hechos hablan por sí solos”, y, en efecto, esos hechos dejan ver que mientras el acreedor habla del saldo insoluto de la deuda, a 2015/09/22, según la copia del “movimiento histórico de transacciones”, el deudor se refiere a una temática diferente, sin ninguna razón coherente, pero acepta que el préstamo fue por la suma indicada por el banco, luego no hay nada que discutir. Desde luego no puede pretender el actor que el banco le cobre solo el monto del capital desembolsado, sino que el saldo incluye capital más los cargos fijos capitalizados, tal como fue acordado.

Corolario de lo analizado, las objeciones prosperan.

Por lo anteriormente expuesto el Juzgado Quinto Civil Municipal de Valledupar,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR probadas las objeciones presentadas por los acreedores BANCOOMEVA S.A. y BANCO PICHINCHA S.A., respectivamente, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONTRA esta decisión no procede recurso.

TERCERO: Devuélvase las diligencias al Conciliador.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado Por:
Jose Edilberto Vanegas Castillo
Juez Municipal
Juzgado Municipal
Civil 005
Valledupar - Cesar

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d7a384cecc18ec503c897e25cd966f6b5fcd315ff17076ef2433382fa56e39d5**

Documento generado en 23/06/2023 07:58:15 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>